



Fuerte tensión en las negociaciones comerciales francesas del sector agroalimentario

A un mes del cierre de las negociaciones de la distribución con sus proveedores, existen importantes diferencias entre las grandes cadenas y los industriales y productores.



ALIMENTACIÓN | INDUSTRIA Y DISTRIBUCIÓN | PRECIOS



EUROPA | FRANCIA

PARÍS 02.02.2022

El código de comercio francés establece que las relaciones comerciales en el último eslabón de la cadena alimentaria, es decir, entre la distribución y su proveedor, deben establecerse mediante un documento escrito que tiene que estar firmado a más tardar el 1 de marzo del año en el que se vayan a aplicar, y que las propuestas de contrato han de someterse a las partes al menos con tres meses de antelación. De ahí que las negociaciones comerciales en Francia se desarrollen del 1 de diciembre al 1 de marzo.

Nos encontramos por tanto a un mes de la fecha límite de firma de estos documentos y la situación es especialmente tensa. La tensión se puso claramente de manifiesto en el último Comité de seguimiento de las negociaciones comerciales del 27 de enero, en el que productores, industriales y el propio Gobierno francés aseguraron que no se están respetando las disposiciones ni el espíritu de la Ley EGAlim 2, que se publicó en octubre de 2021.

Los productores, con los principales sindicatos agrarios FNSEA y Jóvenes Agricultores a la cabeza, denuncian que el enfado está creciendo en el campo ante la posición de la distribución, que está tomando como base de la negociación las tarifas del año pasado, sin tener en cuenta el fuerte encarecimiento de los costes de producción. Señalan además que se mantienen ciertas prácticas comerciales desleales prohibidas por la ley y piden sanciones contundentes. Desde comienzos de enero, han llamado a sus asociados a la movilización frente a la gran distribución para solicitar transparencia en la fijación de precios y el correcto etiquetado del origen. La oferta anunciada en el mes de enero por la cadena Leclerc, a 0,29 €/la barra de pan, es para los productores una muestra de que la distribución sigue sin tomarse en serio las disposiciones establecidas por las Leyes EGAlim 1 y 2.

Los industriales, representados por la Asociación de Industrias Alimentarias (ANIA), la Asociación de marcas ILEC (que cuenta con socios como Danone, Nestlé, Bonduelle, etc.) y las Cooperativas agroalimentarias (La Coopéración agrícola) denuncian que las negociaciones están sufriendo importantes retrasos (en el caso de las cooperativas, informan de que el 36% de sus miembros no han firmado todavía ningún contrato con la distribución). La situación es para ellos muy preocupante, ya que señalan que si bien la distribución está en algunos casos teniendo en cuenta la subida del precio de las materias primas agrarias, en línea con la Ley EGAlim 2, en ningún caso se están reflejando las importantes subidas de los costes no agrarios (energía, embalajes, etc.), que pueden suponer hasta el 60% de los costes totales de estas empresas.

El Gobierno, en boca del ministro de Agricultura y Alimentación, Julien Denormandie, ha dejado claro que se mantendrán firmes para garantizar el cumplimiento de la Ley y sancionarán al que no la respete. Ha informado de que la Dirección General de la Competencia, Consumo y Represión de Fraudes han llevado a cabo 250 controles desde el 1 de enero, estando previsto realizar 1.000 controles hasta el 1 de marzo. También ha afirmado que no se retrasará la fecha límite de las negociaciones.

La próxima cita tendrá lugar en la semana del 21 de febrero, en la que está prevista una nueva reunión del Comité de seguimiento de las negociaciones comerciales. Una cita en vísperas de la inauguración del Salón Internacional de la Agricultura (SIA) en París que abrirá sus puertas el 26 de febrero. El SIA, principal vitrina de la agricultura francesa para el gran público galo y cita obligada de todos los políticos del país, cobra si cabe una mayor relevancia en su edición de 2022, dada su proximidad a las elecciones presidenciales francesas.